

C.A. de Santiago

Santiago, veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

La causa RUC N° 1610022733-2, RIT O-113-2022 del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, sobre apremios ilegítimos del artículo 150 A inciso final del Código Penal, en su versión introducida por la Ley N° 19.657.

Y, en lo concerniente a los tres recursos interpuestos, la sentencia definitiva de veintisiete de marzo de 2023 emitida por dicho tribunal, que decidió **condenar a Héctor Ramón Lara Estrella, a Esteban Moisés Vergara González y a Jaime Nicolás Lagos Lagos**, cada uno, a la pena de **tres años y un día de presidio menor en grado máximo y a la de siete años y un día de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos y oficios público, derechos políticos y profesiones titulares**; y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de **autores del delito consumado de apremios ilegítimos, causando lesiones graves** en la persona de David Brosseau, cometido el día 11 de abril de 2016, en la comuna de Huechuraba. La pena principal impuesta fue sustituida por la pena de libertad vigilada intensiva, por el lapso de tres años y un día; y sin reconocer abonos para el evento que los condenados deban cumplir efectivamente la pena privativa de libertad sustituida.

Contra dicho fallo se interponen sendos recursos de nulidad, esgrimiendo todos ellos la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, por haber la sentencia incurrido en una



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFTB

errónea aplicación del Derecho con influencia sustancial en lo dispositivo al condenar por un hecho que la ley no califica como delito (por falta de concurrencia de elementos del tipo: autoría y sujeto pasivo), como fundamento principal; y, subsidiariamente, por imponerles una pena inaplicable al caso concreto. En la fundamentación principal de los tres recursos, el único disímil es el interpuesto por la defensa del condenado Lara Estrella sólo en cuanto añade como una tercera causa de error de Derecho la omisión de modalidad de negligencia requerida por el tipo penal.

Cada uno de los recursos pide, en concreto, que se declare la nulidad de la sentencia definitiva y se dicte una de reemplazo que absuelva al imputado respectivo del delito de apremios ilegítimos del artículo 150 A del Código Penal; o, en subsidio, que se le condene a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio con remisión condicional, omitiéndose aplicar la accesoria de la pena corporal.

Los tres recursos de nulidad fueron declarados admisibles; tras lo cual se dispuso tener presente las resoluciones que acogieron a tramitación requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Excmo. Tribunal Constitucional, Rol N° 14.331-2023, presentado por Esteban Moisés Vergara González con respecto al artículo transitorio de la Ley N° 20.968, que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, en el proceso penal RIT N° 113-2021, RUC N° 1610022733-2, seguido ante el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. A este último respecto, en dicho requerimiento de inaplicabilidad el Excmo. Tribunal Constitucional dispuso la suspensión de la presente causa desde el 8 de junio de 2023 hasta el 26 de enero último.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFTB

Reanudada la tramitación de esta causa, se fijó audiencia para su vista efectuada el día martes 13 de febrero de 2024, en la que fueron oídos los alegatos de los tres intervinientes que comparecieron a estrados, y en que se fijó para lectura del fallo el día de hoy.

OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

I. Nulidad *ex parte*.

PRIMERO: Que, los tres arbitrios admitidos invocan como causal de nulidad de la sentencia la de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, esto es, que ella incurre en errores de Derecho que influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, de manera principal al condenar a sus representados por un hecho que la ley no califica como delito, al no reunirse los elementos del tipo penal del artículo 150 A del Código Penal según estableció la Ley N° 19.567 y vigente a la fecha de perpetración del hecho (11 de abril de 2016); y, de forma subsidiaria, porque les ha impuesto una pena accesoria de la corporal inaplicable.

En efecto, por una parte y con respecto a la fundamentación principal de la causal invocada, la errónea aplicación del Derecho con influencia sustancial en lo dispositivo se funda en que no se reúnen los elementos del tipo penal por el que se condena (apremios ilegítimos del artículo 150 A referido, según la Ley N° 19.567), por dos motivos comunes; y un tercero, específico, planteado sólo en el recurso del condenado Lara Estrella, extendido también a los otros acusados:

1. Porque la sentencia atribuye a los tres condenados una conducta conjunta, de mutuo acuerdo y con clara distribución de funciones, pero sin explicitar cómo los imputados se habrían



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFLT B

distribuido tales funciones ni quién ejecutó la conducta típica imputada;

2. Porque la sentencia tiene por satisfecha la concurrencia del sujeto pasivo del tipo, esto es, que la víctima se halló privada de libertad; y
3. Porque la sentencia omite el proceso de imputación de negligencia o imprudencia que exige el inciso final del artículo 150 A ya citado.

Por otro lado, el fundamento subsidiario que configuraría la causal de nulidad se hace consistir, por los tres arbitrios, en que:

4. La sentencia yerra al aplicar las penas, al imponer en conjunto con la pena corporal principal -sustituida por la de libertad vigilada intensiva- la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua, por demás eliminada tras entrar en vigencia la Ley N° 20.968.

SEGUNDO: Que, como se ha consignado, la causal de nulidad invocada y en examen es la de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, en relación con una serie de otras disposiciones legales que se referirán en breve.

El artículo 373 letra b) citado establece que procederá la declaración de nulidad total o sólo la parcial del juicio oral y de la sentencia, si el vicio hubiere generado efectos que son divisibles y subsanables por separado sólo respecto de determinados delitos o recurrentes: "b) Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo".

De la lectura de ese precepto legal es claro que, circunscrito al ámbito casuístico que indica, es posible invalidar un fallo que aplique



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPLFTB

erróneamente el derecho; y así será en la especie si -como arbitrio de derecho estricto e influyendo sustancialmente en lo dispositivo- tal errada aplicación involucra a los preceptos legales que singularicen los recurrentes, mas no a otros no explícitamente invocados; y de la manera o con los argumentos específicos en que la planteen.

Pues bien, en relación con su fundamentación principal (inconcurrencia de elementos típicos), los tres recursos alegan la errada aplicación de las siguientes normas legales: artículo 150 A del Código Penal vigente a la época de perpetración de los hechos (abril de 2016) e incorporado a aquel por la Ley N° 19.567, los artículos 1° y transitorio de la Ley N° 20.968, los artículos 1, 15 y 18 del Código Penal y el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República. Y, en relación con su fundamento subsidiario (imposición de pena inaplicable), además de la garantía constitucional recién referida, los artículos 1, 18 y 29 del Código Penal, los artículos 1° y transitorio de la Ley N° 20.968, el artículo 1° de la Ley N° 20.603 y el artículo 1° de la Ley N° 18.216.

Así, de acuerdo con la causal invocada y las expresas normas legales relacionadas, esta Corte tiene que escrutar en qué medida la aplicación que de ellas ha efectuado la sentencia ha sido o no correcta, a lo que se abocará examinando cada uno de los cuatro supuestos errores denunciados.

TERCERO: Que, atendida la naturaleza de la causal de nulidad invocada y fundada -de manera principal- en que se ha condenado por un hecho que la ley no califica como delito o, dicho de otro modo, en la inconcurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal aplicado, el examen de los errores denunciados supone un sustrato o base fáctica al que las normas estimadas infringidas han sido



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPLFTB

aplicadas; de lo que resulta del todo necesario referir los hechos que el tribunal del grado tuvo por acreditados.

Pues bien, el considerando décimo de la sentencia da por establecido que: *“El día 11 de abril del 2016, a las 20:00 horas aproximadamente, David Brousseau, de nacionalidad haitiana, cuando caminaba por calle Las Campánulas a la altura de Los Retamos, comuna de Huechuraba, fue abordado por Héctor Ramón Lara Estrella, Jaime Nicolás Lagos Lagos y Esteban Moisés Vergara González, todos funcionarios de carabineros de la sección de Investigaciones Policiales de la 54° Comisaría de Huechuraba, que vestidos de civil, en el marco de un control de identidad, procedieron a detenerlo y golpearlo en el brazo izquierdo con un objeto contundente, empujándolo a la fuerza hacia el interior del vehículo en el que se trasladaban. Luego, los tres funcionarios policiales trasladaron a la víctima a constatar lesiones al SAPU Los Libertadores de la comuna de Huechuraba, señalándole que no debía mencionar que había sido golpeado por ellos. Producto de las lesiones sufridas, la víctima resultó con fractura de húmero izquierdo de carácter grave. Lesiones que sanan, salvo complicaciones, en 3 meses, con igual tiempo de incapacidad, presentando además secuelas a nivel psicológico producto de los hechos.”*

Esta referencia es relevante por cuanto tales hechos, no impugnados por los recurrentes, resultan necesariamente inamovibles; y son los que, luego, calificaron jurídicamente los sentenciadores aplicando las normas legales que juzgaron apropiadas a aquellos.

CUARTO: Que, entonces, el **primer error principal de aplicación jurídica** que se denuncia, es que la sentencia -en el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFLT B

considerando duodécimo- atribuye a los condenados coautoría, una conducta conjunta y de mutuo acuerdo con distribución clara de funciones, pero que -dicen los recurrentes- no explicita cómo los imputados se habrían distribuido tales funciones ni quién ejecuto la conducta imputada.

Lo anterior sería relevante pues, tras la entrada en vigor la Ley N° 20.968 que modificó el artículo 150 A del Código Penal, aplicado en el fallo, no tiene la misma pena quien ejecuta la conducta (aplicar tormento) de quien sólo conoce su ocurrencia y no la impide o hace cesar teniendo facultad o autoridad necesaria para ello; y, continúan los recurrentes, la sentencia no determinó al autor de la conducta (quien aplicó el tormento) ni distinguió a aquellos que debían impedir que se llevase a cabo.

QUINTO: Que, por una parte y a diferencia de lo que sostienen los recurrentes aludiendo sólo al duodécimo considerando del fallo, lo cierto es que la dinámica del forcejeo entre víctima y acusados y la distribución de actividades entre cada uno de los últimos, funcional a la ejecución del hecho, resulta clara de la lectura de los párrafos 23 y 24 del considerando noveno de la sentencia (pág. 34) que, al analizar y valorar la prueba rendida, concluye que la dinámica descrita por la víctima halla pleno sustento y corroboración en otras pruebas, incluida la testimonial de la propia defensa.

Y que, en relación con la efectiva indeterminación de quien propinó el golpe o aplicó la fuerza que terminó fracturando el húmero izquierdo de la víctima, los sentenciadores del grado -siguiendo a Mir Puig y Cury- razonan que la imputación de coautoría requiere ejecución conjunta y mutuo acuerdo, siendo cada contribución funcional a la ejecución del hecho en su totalidad, de manera que



ninguno de los coautores -separadamente considerado en su actividad- dispone su total realización, sino que lo cometen entre todos.

Así, cuando de mutuo acuerdo (ya expreso o tácito) los tres acusados habrían tomado parte inmediata y directa, facilitando los medios a su alcance para la ejecución del hecho, esta Corte no advierte aplicación errónea alguna de los artículos 1º y 15 del Código Penal.

Por otra parte, en cuanto al argumento de penalidad diferenciada para quienes disponen de codominio del hecho con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.968, resulta improcedente, puesto que el principio de legalidad impone la calificación jurídico-penal de una conducta a la luz de la configuración típica vigente a la época de su realización, según la figura empleada en la especie: la de apremios ilegítimos del artículo 150 A introducido al Código Penal por la Ley N° 19.567 y promulgada con anterioridad al 11 de abril de 2016, fecha de perpetración del hecho que nos ocupa, a menos que la nueva ley resulte más favorable, pero ese no es el caso, conforme se explica más adelante, sin perjuicio de resaltar el fallo de 17 de enero de 2024 por el que, conociendo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad Rol N° 14.331-2023, deducido contra el artículo transitorio de la Ley N° 20.968, el Excelentísimo Tribunal Constitucional estimó que esta ley de reforma no exime a los apremios ilegítimos de toda pena ni le aplica una menos rigurosa, por lo que no se estaría en presencia de una ley más favorable a los requirentes, descartando así una infracción al artículo 19 N° 3 de la Constitución Política; y dejando a salvo, además, la aplicación del artículo 18 del Código Penal y la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXEMPLFTB

facultad del juez de fondo de aplicar una ley posterior que establezca consecuencias jurídico-penales más beneficiosas.

Así, no siendo más favorable la reforma del tipo penal de marras acaecida después de su perpetración, pero antes de pronunciada sentencia de término, no debió arreglarse a ella su juzgamiento y así lo entendieron correctamente los sentenciadores del grado, excluyéndose de esta manera infracción alguna del artículo 18 del Código Penal y de los artículos 1º y transitorio de la Ley Nº 20.968.

Por último, de la correcta aplicación de todos los preceptos legales mencionados, se descarta alguna vulneración a la garantía prevista en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República; por todo lo cual, el primer argumento de error jurídico denunciado no puede prosperar.

SEXTO: Que, el **segundo error** principal de aplicación jurídica denunciado es que la sentencia -en los considerandos décimo y undécimo- tiene por acreditada la calidad de sujeto pasivo del tipo, esto es, que la víctima se halló privada de su libertad; en circunstancias que sólo habría sido conducida a su detención, perturbando o sólo imposibilitando parcialmente el ejercicio material de su libertad de movimiento, que el golpe propinado a la víctima lo habría sido para concretar la detención y no con posterioridad a ella; y que, en suma, no se acreditó que la víctima fuere objeto de apremios ilegítimos estando efectivamente privado de libertad, o dicho de otro modo, con imposibilidad material total de ejercer su derecho de libertad de movimiento.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFLT B

SÉPTIMO: Que, el tipo penal básico de los apremios ilegítimos del artículo 150 A del Código Penal exige del sujeto pasivo que se trate de una persona privada de libertad.

Sobre el particular es útil recapitular ciertos hechos tenidos por acreditados en la causa y algunas inferencias pertinentes de los sentenciadores. El primero, que los acusados abordaron a la víctima en el contexto de un control de identidad realizado por tres funcionarios policiales de la SIP, vestidos de civil, no ajustado a protocolo y por el que, incluso, se les sancionó disciplinariamente (al no haber facilitado medios para que la identidad se acreditase); control de identidad de la víctima, además, del que los sentenciadores no avistaron indicio alguno que justificare su realización. Y, en segundo término, la ya aludida dinámica del forcejeo entre la víctima y los tres acusados, por la que éstos -sucesiva y acumulativamente- abordaron y aplicaron fuerza sobre aquella para vencer su resistencia a ser primero privado de su libertad ambulatoria y luego a entrar a un automóvil, lo que finalmente consiguieron.

Para determinar si la aplicación de los apremios ilegítimos o tormentos a la víctima se efectuó hallándose ya privada la víctima de su libertad, los sentenciadores del grado recurrieron al examen de las circunstancias de la fiscalización de su identidad, como las precedentemente reseñadas; pero también a argumentos doctrinales y siguiendo el enfoque postulado por Garrido Montt entendieron el estar privado de libertad -exigencia del tipo penal que se analiza- de manera amplia, esto es, como el impedimento a desplazarse libremente y con independencia del lugar en que dicho impedimento ocurra (vid Garrido Montt, Mario. Derecho Penal, Parte Especial,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFTB

Tomo III, pág. 409); enfoque doctrinal que esta Corte comparte. En efecto, ha de apuntarse que el tipo penal aplicable al caso busca proteger la libertad personal y seguridad individual de modo que para su configuración basta que la persona afectada se vea impedida, de hecho, en sus posibilidades de movilización, desplazamiento o circulación y en circunstancias que se encuentra sometida al control o bajo la custodia del o de los funcionarios públicos, de manera que no es de rigor la existencia de situación formal de detención. Ese fue precisamente el caso del denunciante, de momento que el mismo fue sujeto de un control de identidad irregular y tras ello reducido por los policías de civil, para ser conducido a un vehículo, siendo violentamente forzado a subirse a dicho automóvil.

De todo lo cual se concluye que los sentenciadores del grado no han aplicado erróneamente el artículo 150 A referido cuando, teniendo en consideración las circunstancias bajo las cuales la víctima fue fiscalizada por los acusados más los argumentos doctrinales invocados, determinaron concurrente la condición de privación de libertad del sujeto pasivo exigida por el tipo penal; por lo que el segundo argumento de error jurídico invocado por los recurrentes, tampoco puede prosperar.

OCTAVO: Que, el **tercer error principal de aplicación jurídica**, denunciado únicamente en el recurso del condenado Lara Estrella, es que la sentencia impugnada -en el considerando undécimo- no indica de qué manera el resultado lesivo (fractura de húmero, lesión grave prevista en el artículo 397 del Código Penal) fue imputable a negligencia o imprudencia del sujeto activo (el empleado público, condenado Lara Estrella), omitiendo señalar de forma específica el estándar de cuidado que los sentenciados debieron



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFLT B

tener (mera impudencia, imprudencia temeraria) y el nivel de su falta que presentaron en la especie. En resumen, por omitir la sentencia el proceso de imputación de negligencia o imprudencia que exige el inciso final del artículo 150 A tantas veces citado.

NOVENO: Que, teniendo especialmente presente lo establecido en el párrafo segundo del considerando primero; y, por lo mismo, sin perjuicio de lo que se razonará en el apartado II de esta sentencia (nulidad *ex officio*), aparece que los fundamentos proporcionados resultan completamente incongruentes e inconducentes a la causal de nulidad invocada, esto es, a demostrar un error de aplicación jurídica.

En efecto, la causal de nulidad invocada exige un error jurídico; pero el recurrente intenta fundar dicho error simplemente en una falta o ausencia de motivación que, por sí misma, podría ser constitutiva de un motivo distinto de invalidación tampoco alegado por el recurrente; falta o ausencia que, además, resulta completamente inconducente para evidenciar un yerro en lo jurídico, esto es, uno que redunde en encuadrar o no con propiedad los hechos acreditados en la causa en alguna de las categorías penales típicas preexistentes que correspondan, en otros términos y en la especie, precisamente dar aplicación al precepto legal pertinente y cuya omisión impacta lo resuelto de manera sustancial; lo que se distingue claramente de una ausencia de motivación.

Así, tanto el defecto de incongruencia entre la causal invocada y sus fundamentos, como el defecto de inconducencia o ineptitud de éstos para justificar aquella, impiden a esta Corte declarar la nulidad solicitada por la razón o motivo en que se la pretende fundar; por lo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFTB

que el tercer argumento de error alegado por el recurrente Lara Estrella no prosperará.

DECIMO: Que, **en último término**, con respecto al fundamento subsidiario que configuraría la causal de nulidad invocada, los tres arbitrios la hacen consistir en que la sentencia -en su considerando décimo noveno- yerra al imponer las penas. Sostienen que, tras la modificación introducida por la Ley N° 20.968, la figura penal de apremios ilegítimos del artículo 150 A (previo) pasó a ser el artículo 150 letra D, “un tipo penal igual, pero menos exigente que el anterior; pero con una pena: “de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente” eliminando de esta forma la pena de inhabilitación absoluta perpetua”.

Los tres recursos añaden que, incluso si se considerase la agravante especial del artículo 150 E nuevo, favoreciendo a los acusados dos atenuantes en ausencia de agravantes, estiman que la pena en concreto debió fijarse en 541 días de presidio menor en grado medio y accesorias legales correspondientes, si la pena no fuere sustituida. Pero, como efectivamente la pena principal fue sustituida por la de 3 años y 1 día de libertad vigilada intensiva y, a su vez, a las penas accesorias de 7 años y 1 día de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargo y oficio público, derechos políticos y profesiones titulares, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, los sentenciadores yerran al aplicar el artículo 29 del Código Penal, porque esta norma no comprende a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPLFTB

Así, el error consiste en que el fallo aplica penas accesorias a una pena sustitutiva de una pena corporal (en circunstancias que las penas sustitutivas -en la especie, la de libertad vigilada intensiva- no llevan aparejadas penas accesorias). En este aspecto, aduce que “el sentido del artículo 1 N° 1 de la Ley N° 20.603 es precisamente introducir penas que tuvieren por objeto sustituir, es decir, desplazar y reemplazar a las penas corporales” en cuyo apoyo cita el artículo 26 inciso 1° de la Ley N° 18.216 (abono del tiempo de ejecución de una pena sustitutiva cuando se la revoca) y jurisprudencia de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso (Rol N° 1279-2015, de 3 de septiembre de 2015, en relación con la pena sustitutiva de remisión condicional no lleva aparejada la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público impuesta al condenado en esa causa).

Finalizan los arbitrios añadiendo que este error jurídico: aplicar conjuntamente las penas accesorias del citado artículo 29 cuando se ha otorgado una pena sustitutiva, impacta el principio de legalidad de las penas establecido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política.

UNDÉCIMO: Que, para dilucidar si el error acusado por los recurrentes es efectivo, resulta necesario previamente analizar tres cuestiones: primero, si en términos de penalidad las reformas introducidas a las conductas típicas relevantes por la Ley N° 20.968 acarrearán o no consecuencias jurídico-penales más beneficiosas para los condenados; segundo, si no fuere así, examinar si las penas impuestas finalmente a ellos se ajustan al marco legal; y, tercero, si la sentencia yerra al aplicar el artículo 29 del Código Penal al imponer una pena accesoria a una pena privativa o restrictiva de libertad sustituida.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFTB

Para resolver la primera cuestión, examinaremos cada una de las conductas típicas relevantes y su marco penal (principal y accesorio) antes y después de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.968.

La figura básica de apremios ilegítimos o tormentos de la Ley N° 19.567 vigente a la época de los hechos de esta causa (11 de abril de 2016), estuvo contenida en el **artículo 150 A inciso primero** del Código Penal, y la penalidad asignada fue la de presidio o reclusión menor en grado medio a máximo, más las penas accesorias correspondientes del artículo 29 ó 30 del Código Penal, según el grado de la pena principal que se impusiere.

Por su parte, la figura agravada del mismo ilícito -que contemplare, por ejemplo, un resultado de lesiones del artículo 397 del Código Penal- estuvo contenida en el **inciso final del artículo 150 A** ya aludido, e imponía como penas principales las de presidio o reclusión mayor en grado mínimo a medio y la de inhabilitación absoluta perpetua; a las que se añadían las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal.

Sabemos que con la reforma de la Ley N° 20.968, en vigor desde el 22 de noviembre de 2016, se introdujo un tipo básico nuevo de tortura y su correspondiente figura agravada, contenidos respectivamente en los nuevos artículos 150 A y 150 B del Código Penal, con una pena de presidio mayor en grado mínimo asignado al tipo básico; y de presidio mayor en grado máximo a presidio perpetuo para su figura agravada. Las penas accesorias correspondientes son las del artículo 28 del Código Penal.

Sabemos además que, efectivamente, las conductas de apremios o tormentos descritas en el antiguo artículo 150 A pasan a



integrar la figura básica de un ilícito ahora denominado apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes no constitutivos de tortura, de carácter residual, contenido en el **nuevo artículo 150 D inciso primero** del Código Penal. Incidentalmente, esta figura ya no exige la condición de que el sujeto pasivo se encuentre privado de libertad cuando se apliquen los apremios. Aquí, la pena principal asignada es, únicamente, la de presidio menor en grado medio a máximo (o sea, se eliminó la posibilidad de reclusión existente bajo el antiguo artículo 150 A); más las penas accesorias correspondientes del artículo 29 ó 30 del Código Penal dependiendo del grado de la pena principal que se imponga.

Por último, la figura agravada de los nuevos apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes no constitutivos de tortura se contiene en el **artículo 150 E** del Código Penal y contempla como pena, únicamente, el presidio mayor en grado medio. Siendo efectivo, entonces, que la reforma eliminó como pena principal adicional la de inhabilitación absoluta perpetua que contemplaba el inciso final del antiguo artículo 150 A; sin perjuicio que, por aplicación del artículo 28 del Código Penal corresponda imponer la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, ahora, en calidad de penas accesorias.

De acuerdo con la calificación jurídica efectuada por los sentenciadores del grado y examinado el panorama del marco penal de los tipos pertinentes antes y después de la Ley N° 20.968, entre la figura agravada del antiguo artículo 150 A inciso final y la figura agravada del nuevo artículo 150 E las diferencias son: 1. que el tipo



penal antiguo contemplaba una pena principal doble compuesta de dos grados, mientras que el nuevo una pena principal única compuesta de un solo grado; 2. que aquel establecía como pena principal adicional la de inhabilitación absoluta perpetua, mientras que el nuevo la excluye en esa calidad pero la mantiene como pena accesoria; 3. que el tipo antiguo contemplaba también como pena la de reclusión, en tanto el nuevo no.

De todo lo cual se puede afirmar que entre la antigua y la nueva figura de apremios ilegítimos el marco penal principal se agravó, al tener asignado hoy como única pena la de presidio mayor en grado medio; cuando antes el marco penal mínimo era de presidio o reclusión mayor en grado mínimo. Y en cuanto al marco penal accesorio, por aplicación del artículo 28 del Código Penal, la figura típica actual también resulta más gravosa.

Corroborra también lo anterior el fallo de 17 de enero de 2024 del Excmo. Tribunal Constitucional que, resolviendo el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad Rol N° 14.331-2023 -deducido precisamente por uno de los condenados en esta causa, Esteban Moisés Vergara González- contra el artículo transitorio de la Ley N° 20.968, estimó que ante esta ley de reforma no se estaría en presencia de una más favorable en relación con la figura de apremios ilegítimos.

Despejado lo anterior, la segunda cuestión a examinar es si la sentencia que se revisa aplicó o no erróneamente las penas finalmente impuestas a los condenados.

Pues bien, los hechos tenidos por acreditados en esta causa fueron calificados jurídicamente por los sentenciadores bajo la figura de apremios ilegítimos o tormentos prevista y sancionada en el inciso



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFLT B

final del artículo 150 A del Código Penal bajo la vigencia de la Ley N° 19.567; y, dentro del marco penal asignado, atendidas las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal establecidas en la causa y lo previsto en los artículos 68 y 69 del Código Penal, procedieron a rebajar un grado al mínimo fijado por la ley e impusieron, finalmente, como penas principales y en concreto: la de 3 años y 1 día de presidio menor en grado máximo y la de 7 años y 1 día de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargo y oficio público, derechos políticos y profesiones titulares; y, atendido el carácter de la pena impuesta (presidio menor en grado máximo), de conformidad al artículo 29 del Código aludido, impusieron como pena accesoria la de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Por último, corresponde analizar si la sentencia en examen incurre en error al imponer una pena accesoria a una pena privativa de libertad sustituida.

Los recurrentes sostienen que al imponer la sentencia la pena de inhabilitación absoluta perpetua, como accesoria de la pena principal sustituida por la de libertad vigilada, los sentenciadores aplicaron erróneamente el artículo 29 del Código Penal.

Lo que los recurrentes olvidan es que, como se anotó en el párrafo cuarto precedente, la penalidad asignada al delito que se les imputa (el del antiguo artículo 150 A inciso final) comprendía dos penas principales: una privativa de libertad y la otra la de inhabilitación absoluta perpetua; y que el ámbito de aplicación del régimen de penas sustitutivas de la Ley N° 18.216 sólo alcanza a las primeras.



En efecto, la Ley N° 18.216 permite que se pueda sustituir la ejecución de penas privativas o restrictivas de libertad, entre varias opciones, por la pena de libertad vigilada intensiva. Más aún, tanto bajo la figura del antiguo artículo 150 A de la Ley N° 19.567 como bajo la del nuevo artículo 150 E de la Ley N° 20.968, los condenados como autores del delito consumado de apremios ilegítimos (opción vedada a los autores de tortura del nuevo artículo 150 A del Código Penal) pueden acceder al régimen de penas sustitutivas; como efectivamente ocurrió con los tres condenados en estos autos, al cumplir las condiciones contempladas en los artículos 15 bis letra a) y 15 inciso segundo de la Ley N° 18.216.

El intento dialéctico de los recurrentes por demostrar que el artículo 1° de la Ley N° 20.603 tuvo el sentido de “introducir penas que tuvieran por objeto sustituir, es decir, desplazar y reemplazar a las penas corporales, cuando concurrieren los requisitos que dicha ley establece para su sustitución”, por ejemplo, invocando los efectos de la revocación de una pena sustitutiva (artículo 26 de la Ley N° 18.216), se estrella al considerar dos cosas: primero, que -salvo una ley posterior más favorable, que no es el caso- la fecha de comisión de un delito es la que determina la penalidad aplicable; y, en segundo lugar, el carácter de pena principal conjunta (no accesoria) que poseyó la inhabilitación absoluta perpetua mientras estuvo vigente el antiguo artículo 150 A inciso final y a la fecha de comisión del delito. De esta forma, no siendo aquella pena -por su propia naturaleza- susceptible de sustitución alguna, los sentenciadores no erraron al imponerla -precisamente en cuanto pena principal subsistente y no sustituible- con la de libertad vigilada intensiva, que sí sustituyó a la pena privativa de libertad principal, concurrente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFLT

El error de los recurrentes, entonces, es confundir el carácter con que la ley previó la aplicación de la pena de inhabilitación absoluta perpetua bajo la Ley N° 19.567 (pena principal) y prevé bajo la Ley N° 20.968 (pena accesoria del artículo 28 del Código Penal).

De la manera explicada, a juicio de esta Corte, los sentenciadores aplicaron correctamente los artículos 1°, 18 y 68 del Código Penal, los artículos 1° y transitorio de la Ley N° 20.968 y el artículo 1° de la Ley N° 18.216 para la determinación e imposición de las penas pues, no siendo más favorable para los acusados la reforma introducida por la Ley N° 20.968 después de cometido el delito, precisamente no arreglaron a ella su juzgamiento; porque la pena en concreto que se impuso se encuentra dentro del marco penal señalado por la ley y de la facultad que ésta entrega al juzgador para determinarla; y, finalmente, porque la imposición de la pena de inhabilitación absoluta se debió a su carácter de pena principal subsistente y no como pena accesoria. Asimismo, tampoco dieron errónea aplicación al artículo 29 del Código Penal, ni al artículo 1° de la Ley N° 20.603; y con todo ello, por lo mismo, tampoco infringieron la garantía del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política.

Razones por las que el último y subsidiario fundamento de la causal única de nulidad invocada habrá de ser desestimado.

Desechados así todos los fundamentos, principales y subsidiario, de errónea aplicación del Derecho, ninguno de los tres recursos interpuestos en favor de los condenados para invalidar la sentencia en alzada podrá prosperar.

Ello, sin perjuicio de los motivos diversos que con ese mismo fin se exponen enseguida.

II. Nulidad *ex officio*.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFTB

DÚODECIMO: Que el recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral -total o parcialmente- junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda, por las causales expresamente señaladas en la ley.

Que, a su turno, el artículo 379 de ese mismo cuerpo legal impide que una vez interpuesto un recurso de nulidad puedan invocarse nuevas causales a su respecto; empero, habilita a esta Corte para acoger el que se hubiere deducido en favor del imputado por un motivo distinto del invocado por el recurrente, siempre que dicho motivo fuere alguno de los contemplados en el artículo 374.

Y, por las consideraciones latamente expuestas, ninguno de los recursos interpuestos en favor de los condenados puede prosperar por los motivos y la causal de nulidad en ellos invocados.

DÉCIMO TERCERO: Que, la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal prescribe que el juicio oral y la sentencia, o parte de ellos, será siempre anulado “cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e)”.

Por su parte, y en lo pertinente al motivo absoluto de nulidad que advierte esta Corte, el artículo 342 referido dispone que la sentencia definitiva contendrá: “d) Las razones legales o doctrinales que sirvieran para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo”, lo que naturalmente guarda relación con la exposición de los hechos y circunstancias que los sentenciadores dieron por probados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 de ese mismo Código.

DÉCIMO CUARTO: Que, la figura penal que interesa es la de apremios ilegítimos o tormentos del antiguo artículo 150 A del Código



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFLT B

Penal que, como se ha dicho, contempló en su inciso primero un tipo penal básico; y en su inciso final un tipo agravado. Los elementos típicos de interés en la figura básica son su verbo rector: aplicar, y el objeto del mismo: el tormento o apremio ilegítimo, sea físico o mental; en tanto que para la figura agravada es esencial que al infligirse los apremios se cause, mediando negligencia o imprudencia, algún resultado lesivo de los que su inciso final mencionaba.

Que, por otra parte, de la atenta lectura del considerando undécimo de la sentencia en revisión, esta Corte advierte -en el argumento de los sentenciadores para calificar jurídicamente los hechos acreditados bajo la figura agravada del inciso final del antiguo artículo 150 A del Código Penal- un defecto lógico referido a la ausencia de una fundamentación suficiente (o explicativa) acerca de: 1. la unidad de acción o de hechos (en el dolo) que pretende *vis-à-vis* la eventual pluralidad de los mismos; y 2. La concurrencia de negligencia o imprudencia requerida para el resultado lesivo; deficiencia que, como se explicará, acarrea una sustancial influencia en lo dispositivo del fallo.

DÉCIMO QUINTO: Que, tal como se sostiene en la sentencia que se revisa, la figura básica de los apremios ilegítimos exige la concurrencia del dolo; y, al respecto, se aboca a justificarla en el párrafo séptimo de su undécimo considerando. Allí, se lista una serie de actividades (coaccionar para evitar denuncia, esposar, mantener en custodia, y ofrecer dinero y trabajo por silencio) que expanden la concurrencia del dolo típico más allá de la finalidad original de un apremio sin autoridad alguna, esto es, el dolo (abusivo de poder) para compeler un control de identidad sin indicio alguno que lo justificare y que derivó en reyerta para detener y subir a un vehículo a la víctima.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFTB

La fiscalización de la identidad de la víctima se realizó -en los hechos- sin autoridad o legitimidad alguna para ello (dolo abusivo de poder, como se corrobora además por el incumplimiento de los agentes fiscalizadores al protocolo de control de identidad). Así, en otras palabras y en cuanto a la extensión (o cobertura) del dolo, las acciones perpetradas por funcionarios policiales de civil funcionales al fin de compeler u obligar a la víctima a que hiciere algo -en el caso, deponer su resistencia y subir a un vehículo con prontitud- son las que habrían requerido un dolo común a los tres agentes para satisfacer apropiadamente el tipo básico de apremios ilegítimos del inciso primero del antiguo artículo 150 A del Código Penal.

Pero, si el dolo se extiende hasta abarcar el resultado lesivo (la fractura del húmero del brazo izquierdo) para subsumir la conducta plural estimada unitaria en la figura agravada del inciso final del mismo artículo 150 A, hubiera resultado esperable que los sentenciadores explicasen y justificasen cómo o de qué manera el dolo en el plan común original contemplaba *ex ante*, esto es, de manera previsible, provocar una lesión de esa naturaleza, máxime si no se pudo determinar la identidad del causante directo del golpe propinado; y, aún más, justificar (ahora sí, de acuerdo con los recursos de nulidad interpuestos) el yerro negligente o imprudente en la entidad del riesgo.

Incluso la doctrina penal clásica previene sobre los peligros de otorgar tal extendida licencia a los magistrados atendido el carácter “*indefinido e indefinible*” de los abusos de autoridad, tanto desde el punto de vista de sus elementos materiales como de sus efectos. El propio Carrara ejemplificó estos abusos, entre varios otros, notablemente con “*la detención con maltratos, ejecutada por un*



carcelero”, para poner de relieve que “el hecho es criminoso por el solo abuso de autoridad” y que “como el agente culpable puede, en los distintos casos que se le presenten, para atacar todos y cada uno de los derechos, emplear el poder público que le fue conferido, resulta que el abuso de autoridad puede combinarse con todos los delitos:... con el homicidio o las lesiones personales en el agente de la fuerza pública que ejerce violencia... en una palabra, con todos los delitos, tanto sociales como naturales. Por esto es preciso repetir que por el aspecto de su fuerza física, subjetiva y objetiva, el abuso de autoridad sería un delito indefinible si cada vez que ocurre absorbiera en sí el título criminoso” (Carrara, Francesco. Programa de Derecho Criminal. Parte Especial, Volumen V, Editorial Temis, Bogotá, 1961, págs. 55 y 56).

Contemporáneamente, la doctrina trata dicha absorción en la teoría concursal. En efecto, Salinero recuerda que, la “pluralidad de delitos, también conocido como concurso... se presenta cuando a una persona se le puede imputar la realización de un supuesto de hecho de diversos tipos penales -a lo menos dos- o la reiteración (frecuencia) de uno mismo”. (Salinero Echeverría, Sebastián. (2021). *El concurso de delitos en la práctica de la judicatura chilena. Una aproximación empírica desde el estudio de casos simulados*. Política criminal, 16(31), 30-61. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992021000100030>). Y que, mientras en el concurso ideal de delitos un solo acto (de aquí, unidad de acción) supone la comisión de varios delitos en el que se aplica la pena del más grave, limitada a las que se podrían imponer de forma separada; el concurso real de delitos se diferencia, precisamente, por no existir tal conexión entre los ilícitos, los que -por esa misma razón- han de sancionarse separada y



acumulativamente. La doctrina ha incluido también el concurso medial o concurso ideal impropio en el cual, existiendo una conexión ideológica entre los delitos concurrentes, uno ha de ser medio necesario para cometer otro. A nivel positivo, la regla general del concurso real o material se plasma en el inciso primero del artículo 74 del Código Penal; mientras que los dos restantes lo hacen en el artículo 75 del mismo cuerpo legal.

En cambio, al llevar su examen del dolo, que se estimó concurrente en otras acciones, o hechos, eventualmente constitutivos de otros ilícitos *per se* y sin considerar cada uno por separado para admitir o desechar tal pluralidad, la sentencia carece de la fundamentación legal o doctrinal necesaria para calificar jurídica y apropiadamente los hechos. Aún más, se echan especialmente en falta esas consideraciones cuando extiende el examen del dolo concurrente a conductas o hechos posteriores incluso a la lesión resultante (fractura de húmero izquierdo, de carácter grave).

De esta manera, entonces, por ausencia de la fundamentación referida, los sentenciadores abrieron un flanco de inconsistencia en su razonamiento, manifestado en el párrafo final del considerando undécimo. En la especie, al atribuir a una serie de conductas o hechos (propia del concurso real de delitos) unidad de acción en el dolo de un “plan común”, los sentenciadores no sólo debieron justificarla en su existencia y extensión; sino que, además, tendrían que haber abordado las opciones concursales posibles y salvado -argumentativamente- la inconsistencia que supone que tales conductas o hechos plurales -cuyo dolo común no fue justificado en los términos antes referidos- terminen sancionados con una pena agravada por el resultado lesivo, sin haber abordado antes y



explicado al menos en abstracto la cuestión de su penalidad, con los argumentos legales o doctrinales que se extrañan. Expresado de otro modo, los sentenciadores incurren -en los dos últimos párrafos del considerando undécimo- en la incoherencia de presentar como unitarias un cúmulo de conductas supuestamente desplegadas que no analizan en lo particular y a las que atribuyen una conexión dolosa no justificada; mientras, por otro lado, descansan en cuanto a la aplicación de la pena sólo en la agravación prevista para una de esas conductas o hechos (aplicar apremios) cuyo tipo -sin embargo- exige negligencia o imprudencia en el resultado.

Examinemos, ahora, la falta de fundamentación legal o doctrinal que se observa en cuanto a la concurrencia (o no) de negligencia o imprudencia, requerida para el resultado lesivo.

Los sentenciadores abordan la agravación por resultado del inciso final del antiguo artículo 150 A del Código Penal en el párrafo final del considerando undécimo del fallo. En base a la prueba rendida tienen por acreditada la existencia de una lesión grave de aquellas del artículo 397 del Código citado; y de la misma coligen, sin fundamento expreso, que el golpe causante de la lesión propinado a la víctima constituyó un castigo disuasivo funcional a la finalidad original buscada que, como se acaba de explicar, los sentenciadores entendieron de una manera amplia. Esta conclusión no se condice con el explícito requisito del tipo penal invocado por los sentenciadores para condenar, pues la norma en cuestión exige ineludiblemente que el resultado lesivo -en este caso, la lesión grave- sea “imputable a negligencia o imprudencia del empleado público”. Más aún, igualmente sin mediar explicación, los sentenciadores concluyen que, en un contexto de hechos que juzgan coactivo, los



condenados crearon un riesgo lesivo a la víctima, previsible, e idóneo para provocar una lesión grave. Pero la inconsistencia que aquí se advierte no se manifiesta sólo en la doble ausencia de fundamentación recién aludida, sino que continúa cuando los sentenciadores, en las dos líneas finales del considerando undécimo declaran, por un lado, que “los tres acusados generaron un resultado no esperado, erraron en la entidad del riesgo inherente a la conducta típica”; y, por otro que, de esa forma, concurre “imprudencia consciente respecto del resultado lesivo”.

Ello es así no porque -como sostuvo el recurso de nulidad interpuesto por el condenado Lara Estrella- la sentencia no indique “de qué manera el resultado de la lesión fue imputable a negligencia o imprudencia”, ni por “omitir señalar de forma específica el cuidado que los sentenciados debían tener y el nivel de falta que presentaron en la especie”, ni si estaban o no capacitados para conjurar la incapacidad de adoptar algún estándar de precaución pertinente a evitar el resultado típico lesivo, exigible a empleados públicos; sino porque -como explica Garrido Montt - la figura agravada que nos ocupa, esto es, la de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves es aplicable sólo en la medida que haya culpa o negligencia (Garrido Montt, Mario. Derecho Penal. Parte Especial, Tomo III, 4ª edición, 2010), que no tiene que ver con la entidad del riesgo previsible y que importa para agravar la sanción aplicable (según el resultado del apremio aplicado) más no para establecer la existencia misma del delito por el que se condena.

Como es posible advertir, la mención al “riesgo inherente a la conducta típica” precisaba de una explicación completa -a la luz de los hechos y circunstancias tenidos por acreditados- acerca del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFTB

carácter o naturaleza de ese riesgo, pues sólo esa determinación podría dar origen, luego, a un estándar de conducta (para los empleados públicos) con el que comparar la conducta reprochada (como echa de menos el recurrente Lara Estrella), para estimar la previsibilidad de resultados y/o evaluar el grado de descuido atribuible en el resultado a cada uno de los agentes que intervinieron en su producción máxime si, como en el caso de autos, no fue posible establecer autor directo.

DÉCIMO SEXTO: Que, es principio general del Derecho que toda declaración de nulidad requiere de un perjuicio.

Que, en el caso de autos, el motivo de invalidación que se invoca y justifica *ex officio* no es la excepción, porque saber si existe o no unidad o pluralidad de acción o de hechos determina la regla de sanción y, en concreto, la pena aplicable a sus perpetradores. En otras palabras, las consecuencias jurídico-penales asociadas a figuras delictivas contenidas eventualmente bajo el supuesto de un concurso ideal de delitos son completamente diferentes a aquellas susceptibles de producirse en el de un concurso real. Sólo a título ilustrativo, bajo este último supuesto: entre el delito de apremios ilegítimos y el de lesiones graves, y bajo las mismas condiciones determinantes de la pena empleadas por el fallo en examen, el marco punitivo en concreto no pasaría de dos penas principales de presidio (o reclusión) menor, la de inhabilitación absoluta temporal, con más las accesorias legales; lo que, contrastado con las penas ya impuestas por la sentencia y dependiendo de las circunstancias concomitantes que se admitan en juicio, constituye un escenario hipotético que podría resultar más benigno a los actuales condenados, para quienes -en virtud de la garantía contenida en el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFTB

artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, desarrollada en la especie en el artículo 1° y 18 del Código Penal y artículo 342 letra d) del Código Procesal Penal, más lo razonado aquí por esta Corte- debió ser examinado, ya para establecerlo o descartarlo.

Así, la circunstancia de adolecer el fallo -en lo que se ha advertido- de razones legales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias -en lo que se ha advertido- importa un perjuicio sólo subsanable con la declaración de nulidad total del juicio oral y de la sentencia definitiva dictada en él. Lo primero, porque resulta indudable que la forma de apreciación de los hechos -que conduce luego a su correspondiente encuadre jurídico- no puede ser reproducida en una instancia ajena al principio de inmediación y, también, por la posibilidad prevista en el inciso tercero del artículo 341 del Código Procesal Penal, en relación con los incisos primero y final del artículo 386 del mismo Código; y lo segundo, porque ha sido precisamente el vicio de falta de fundamentación sobre la calificación jurídica de los hechos -en los aspectos referidos en el considerando décimo quinto, explicados en el décimo sexto y con influencia sustancial en lo dispositivo según consigna el presente motivo- los que impelen a esta Corte a actuar de oficio y acusar la causal de invalidación contemplada en el artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342 letra d), ambos del Código Procesal Penal.

Por estas consideraciones y normas legales citadas; y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 341 inciso tercero, 342 letra d), 360, 372, 374, 376 inciso segundo, 379 inciso segundo, 384 y 386 incisos primero y final del Código Procesal Penal, se declara que:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFLT B

1.- Se rechazan los recursos de nulidad interpuestos por los abogados defensores penales privados don Daniel Ignacio Andonie Castillo, en representación del condenado Héctor Ramón Lara Estrella, y don Felipe Alonso González Hernández, en representación del condenado Esteban Moisés Vergara González; como también el interpuesto directamente por el sentenciado Jaime Nicolás Lagos Lagos; los tres recursos, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago con fecha veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la causa RUC N° 1610022733-2, RIT O-113-2022 la que, en consecuencia, no es nula por los fundamentos esgrimidos por los mencionados recursos; y sin perjuicio de lo que se resuelve a continuación.

2.- Procediendo de oficio, **se acogen los recursos deducidos en favor de los tres imputados: Héctor Ramón Lara Estrella, Esteban Moisés Vergara González y Jaime Nicolás Lagos Lagos, y se anula totalmente el juicio oral realizado en la causa RUC N° 1610022733-2, RIT O-113-2022 y la sentencia definitiva dictada en él e individualizada precedentemente;** y se retrotrae el procedimiento al estado de realizar un nuevo juicio oral ante el Tribunal de Juicio Oral no inhabilitado que corresponda, al que se remitirán estos autos para que así lo disponga.

Se previene que el ministro señor Astudillo concurre a la actuación de oficio teniendo especialmente en cuenta que del estudio de la sentencia no logra advertirse justificación suficiente acerca de cómo y en qué medida un golpe violento y directo propinado en el brazo de la víctima, capaz de provocar la fractura del húmero, pueda ser estimado como constitutivo de “negligencia o imprudencia” o, hipotéticamente, como una suerte de preterintencionalidad en que el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPLEFTB

resultado habría superado la intención del o de los hechores. Tales falencias son relevantes porque, unidas a las que se han advertido a propósito de la necesidad de descartar o confirmar la posibilidad concursal entre el delito base y el resultado, impactan en la determinación de la sanción penal, aspecto crucial de un fallo, donde no se debe pecar de exceso ni de defecto.

Regístrese y comuníquese a los intervinientes en la audiencia fijada, sin perjuicio de su notificación por el estado diario; hecho, devuélvase.

Redacción del abogado integrante Sr. Rafael M. Plaza Reveco y de la prevención, su autor.

Rol N° 1675-2023 Penal.

Pronunciada por la **Octava Sala** de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la ministra (s) señora Paola Díaz Urtubia y el abogado integrante señor Rafael Plaza Reveco.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPLFTB

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Omar Antonio Astudillo C., Ministra Suplente Paola Cecilia Diaz U. y Abogado Integrante Rafael Mauricio Plaza R. Santiago, veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXWCXMPFTB